

La operatividad de la gobernanza armada en el Estado Mayor Central*

Operationalization of Armed Governance in the Central General Staff

Sebastián Camilo Reyes Guzmán**
Nicolás Alexander González Rojas***

FECHA DE RECEPCIÓN: JULIO DE 2023 | FECHA DE APROBACIÓN: AGOSTO DE 2023

Para citar este artículo: Reyes Guzmán, Sebastián C. & González Rojas, Nicolás A. (2023). La operatividad de la gobernanza armada en el Estado Mayor Central. *Criterios Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 16(2), 1-36. <https://doi.org/10.21500/20115733.7809>

Resumen

Este artículo examina la operatividad de la gobernanza armada ejercida por el Estado Mayor Central en Colombia. Se propone analizar cómo estas organizaciones –que discursivamente se identifican como un grupo insurgente y operan a modo de consorcio constituido por múltiples empresas criminales– han consolidado su control territorial y económico, adaptando sus estrategias a las dinámicas locales de conflicto armado y economías ilícitas. Para ello, se emplea un enfoque cualitativo de estudio de caso, utilizando fuentes prima-

* Artículo de investigación.

** Profesor asociado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de San Buenaventura; catedrático en el departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana; investigador adscrito al Grupo Interdisciplinario de estudios en Sociedad, Religión y Política. ORCID <https://orcid.org/0009-0005-8328-1243>

*** Analista GAOR, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación. ORCID <https://orcid.org/0009-0004-5470-297X>

rias y secundarias de información, que a través de un modelo de correlación cualitativa permiten un análisis detallado de la seguridad, justicia, normas y regulación económica inherentes a la gobernanza armada, asimismo, se pondrá en diálogo con las dinámicas sociales, económicas y territoriales que, para esta investigación, podrán identificarse en las regiones de Guaviare, Cauca, Putumayo, Caquetá y Antioquia. Los resultados revelan que este actor armado implementa diferentes tipos de gobernanza, desde colaboraciones con instituciones locales hasta formas coercitivas de control violento. Las conclusiones destacan la capacidad del Estado Mayor Central para adaptarse a diversas condiciones territoriales y su papel en la configuración del orden social y económico en zonas donde el Estado tiene una presencia diferenciada.

Palabras Clave

Estado Mayor Central, Gobernanza armada, Gobernanza criminal, Gobernanza rebelde, violencia.

Abstract

This article examines the operationalization of the armed governance exercised by the Central General Staff in Colombia. It proposes to analyze how these organizations - which discursively identify themselves as an insurgent group and operate as a consortium made up of multiple criminal enterprises - have consolidated their territorial and economic control, adapting their strategies to the local dynamics of armed conflict and illicit economies. To this end, a qualitative case study approach is employed, using primary and secondary sources of information that, through a qualitative correlation model, allow for a detailed analysis of the security, justice, norms and economic regulation inherent to armed governance, as well as a dialogue with the economic, social and territorial dynamics that can be identified for this research in the regions of Guaviare,

Cauca, Putumayo, Caquetá and Antioquia. The results reveal that this armed actor implements different types of governance, from collaborations with local institutions to coercive forms of violent control. The findings highlight the capacity of the Central General Staff to adapt to diverse territorial conditions and its role in shaping the social and economic order in areas where the state has a differentiated presence.

Keywords

Central General Staff of the ex-FARC, armed governance, criminal governance, rebel governance, violence.

1. Introducción

Para algunos autores, la gobernanza criminal y la gobernanza rebelde han sido conceptos utilizados en los últimos años frente a la explicación de la forma en que se comportan los actores armados en un territorio. Estos conceptos intentan mostrar al actor armado como un paraestado¹, el cual regula el comportamiento de una sociedad por medio del monopolio legítimo de la violencia, en térmi-

1 El concepto de paraestado se refiere a entidades o estructuras que, aunque no forman parte formal del Estado, ejercen funciones que normalmente estarían bajo la responsabilidad de este, especialmente en áreas de administración de justicia, provisión de seguridad o gestión territorial. Según Darío Fajardo Montaña (2014), el paraestado se puede definir como una estructura que “funciona paralelamente al Estado, suplantándolo en funciones esenciales como el mantenimiento del orden y la aplicación de la justicia”, con el fin de consolidar su legitimidad y ejercer dominio sobre territorios específicos en ausencia de una autoridad estatal consolidada. El paraestado también ha sido asociado con formas de gobernanza híbrida, en la que actores armados ilegales coexisten y negocian con estructuras estatales. Como señala Nazih Richani (2002), estas estructuras “representan una mezcla de lo estatal y lo no estatal”, especialmente en regiones donde la capacidad del Estado es limitada y las instituciones formales no tienen una presencia efectiva. En estas áreas, los grupos armados tienden a implementar mecanismos para garantizar cierto orden social, pero a menudo con fines de lucro o de mantenimiento de poder. Francisco Gutiérrez Sanín (2004) argumenta que el paraestado no solo se refiere a la usurpación de funciones estatales, sino también a cómo estas organizaciones configuran una estructura paralela de poder que interactúa directamente con las instituciones formales. Esta interacción puede incluir formas de colusión, donde ciertos sectores del Estado permiten o facilitan la acción de actores armados a cambio de estabilidad local o control sobre economías ilegales.

nos de Max Weber, para un fin determinado, el control territorial o la toma del poder.

Sin embargo, en el actual panorama del conflicto colombiano y con la creación de grupos que surgieron después de los acuerdos de paz (Disidencias de las Farc-EP y Clan del Golfo), las dinámicas tanto delictuales como de control a la población han cambiado, este artículo pretende dar una perspectiva de cómo puede entenderse la Gobernanza Armada, pensando en un actor armado en específico, las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las Farc-EP, en adelante EMC, quiénes desde antes de la firma del acuerdo de paz en el año 2016 decidieron que

El Frente primero Armando Ríos de las Farc-EP no se desmovilizará. Por considerar la política del estado colombiano y sus aliados solo buscan el desarme y la desmovilización de las guerrillas, no están pensando en la solución de los problemas sociales y económicos del país. (Estado Mayor Central, 2016, p. 1)

Los comandantes disidentes del proceso de Paz empezaron la recomposición de estructuras armadas en los Llanos Orientales con proyección hacia otras zonas del país donde también había guerrilleros en desacuerdo por la negociación con el gobierno.

Estas guerrillas se unieron con el fin de conformar estructuras armadas en las zonas Orientales y del Océano Pacífico, reclutando guerrilleros que no estuvieran de acuerdo con el proceso de dejación de armas. De esta forma, mientras empezaba el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales de transición y normalización bajo los decretos 2001 y 2026 del 2016 –actualmente Áreas Especiales de Reincorporación a través del decreto 1048 del 2024–, las estructuras armadas de disidentes iniciaron un proceso de reagrupamiento y reclutamiento de nuevos integrantes con experiencia en el uso de la violencia: “Pedimos solidaridad de todos los sectores oprimidos de

Colombia y el mundo, con los guerrilleros que quedamos en pie de lucha.” (Estado Mayor Central, 2016, p. 3)

Como se mencionó anteriormente, buscar el acercamiento por medio de la población en las zonas donde las antiguas Farc-EP tenían presencia parecía ser uno de los elementos de mayor importancia para las organizaciones armadas que se empezaban a crear; sin embargo, en las lógicas de guerra con otros grupos armados esta dinámica empezó a ser más que un acercamiento y empezó a transformarse en un ejercicio de control a la población.

Este artículo pretende mostrar cómo puede entenderse bajo la perspectiva de la Gobernanza Armada, la forma en que funcionan las estructuras del EMC como parte de una organización armada, la cual tiene una forma similar a las antiguas Farc-EP, pero sus fines son distintos. Para esto se piensa analizar a esta organización en la lógica de una empresa criminal, con una distribución regional autónoma, pero atada a un fin determinado por un organismo central, que tiene distintos niveles de Gobernanza Armada aplicado en sus integrantes, en los recursos ilícitos y la interacción con otros actores criminales de las zonas donde tienen presencia y, por último, con la población civil como actores en un territorio.

¿Qué es y cómo surge el EMC?

El surgimiento del EMC se remonta al periodo anterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. En julio de 2016, cuando concluían las negociaciones en La Habana, una facción liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, no se acogió al acuerdo aludiendo darle continuidad a la lucha armada y las aspiraciones de hacerse del poder político en Colombia. A pesar de los esfuerzos de la dirección de las FARC, incluido el despliegue de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’ –abatido en la primera mitad del 2022–, para

restablecer la disciplina y neutralizar a Mordisco, tanto este último como Gentil Duarte abandonan el proceso, lo que llevó a la creación formal de un grupo disidente que consolidó varios frentes (InSight Crime, 2024).

Este cisma estuvo motivado por la percepción de que el objetivo principal del Gobierno era el desarme, en lugar de abordar los problemas sociales y económicos profundamente arraigados en Colombia (Fundación Paz & Reconciliación, 2024). Poco después, otros frentes, como el 10, el 28 y el Carolina Ramírez, también se separaron del cuerpo principal de las FARC, marcando la consolidación temprana de lo que más tarde se conocería como el EMC.

El EMC afianzó aún más su poder mediante alianzas estratégicas con carteles mexicanos y estructuras criminales brasileñas, reafirmando su papel en el tráfico de cocaína. A pesar de su compromiso con la política de Paz Total del Gobierno colombiano bajo la presidencia de Gustavo Petro, han surgido divisiones internas en el EMC, en particular tras la suspensión del alto el fuego en algunas regiones debido a incidentes violentos en los que se ha visto implicado el grupo (Fundación Paz & Reconciliación, 2024).

Configuración y presencia territorial del EMC

La configuración actual del EMC consta de aproximadamente 28 subestructuras o frentes, divididas en cuatro bloques principales y un comando central. Estas facciones regionales se han posicionado estratégicamente en zonas clave de Colombia, lo que ha permitido al EMC dominar importantes extensiones de territorio.

Para 2024, el EMC tiene presencia en 209 municipios de 22 departamentos, lo que representa un notable aumento frente a los 166 municipios de 2023 (Fundación Paz & Reconciliación, 2024).

Esta expansión territorial es evidente en regiones como el Cauca, donde el EMC controla 41 de los municipios del departamento, lo que representa el 95,3 % de la región. El Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA) juega un papel crucial en esta consolidación territorial, particularmente en el sur de Colombia, ya que extiende su influencia a Nariño, Valle del Cauca, Huila y Tolima. Este posicionamiento estratégico permite al EMC controlar las rutas críticas del narcotráfico y ejercer dominio sobre las economías formales e informales (Conflict Responses, 2024).

Los repertorios de violencia empleados por el EMC son variados y dependen del contexto. En regiones como Cauca, Nariño y Putumayo, el grupo participa en enfrentamientos armados directos no solo con las fuerzas estatales, sino también con grupos armados rivales, como la Segunda Marquetalia (SM) y el ELN. Por ejemplo, en el Cauca se han registrado enfrentamientos entre el Frente Carlos Patiño del EMC y el Frente Diomer Cortés, apoyándose en la Columna Móvil Freddy Ortiz de la Segunda Marquetalia o el Frente de Guerra Suroccidental del ELN. Estos enfrentamientos han causado numerosas víctimas y han desestabilizado aún más a las comunidades locales (Defensoría del Pueblo, 2024).

La expansión del EMC en la región amazónica a través del Bloque Jorge Briceño, especialmente en departamentos como Putumayo y Caquetá, se ha caracterizado por el aumento de la violencia contra líderes socioambientales y grupos indígenas. Esta violencia está estrechamente ligada a economías extractivistas y la explotación de los recursos naturales, como la deforestación, la minería ilegal y el control de las rutas fluviales, cruciales para el narcotráfico. El Frente Carolina Ramírez y el Frente Rodrigo Cadete han encabezado esta expansión territorial, enfrentándose frecuentemente con grupos armados locales como los Comandos de la Frontera y la Columna Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia (Fundación Paz & Reconciliación, 2024).

En Antioquia, el Bloque Magdalena Medio ha mantenido un precario equilibrio de poder mediante alianzas con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, con el fin de contrarrestar la presencia del Clan del Golfo (EGC). Una dinámica similar se desarrolla en Bolívar, donde los frentes del EMC colaboran con el ELN para combatir a grupos rivales en municipios como Arenal, Cantagallo y Simití (InSight Crime, 2024).

A pesar de sus divisiones internas, el EMC ha surgido como el mayor grupo disidente de las FARC-EP, al mando de una fuerza de aproximadamente 3480 miembros, de los cuales 2149 son combatientes y 1331 pertenecen a redes de apoyo (InSight Crime, 2024). Aunque su participación en la política de Paz Total del gobierno colombiano demuestra su voluntad de negociar, la estructura del grupo sigue estando muy fragmentada, con diferentes grados de compromiso con el proceso de paz entre sus facciones regionales.

¿Cohesión y fragmentación?

El liderazgo y la fragmentación interna del EMC se han hecho cada vez más pronunciados a medida que se desarrollan las negociaciones en el marco de la Paz Total. Iván Mordisco es considerado el comandante nacional del EMC y una figura clave dentro de la Dirección Nacional de la organización. Tras haberse unido a las antiguas FARC en 1995, inicialmente, como parte del Frente 39 y, posteriormente, del Frente Primero, ineludiblemente, Mordisco ocupa una posición destacada dentro de la cúpula del grupo (InSight Crime, 2024). Sin embargo, su ausencia de la mesa de negociaciones develó la fragmentación del EMC y la imposibilidad en participar como una organización plenamente cohesionada en la Paz Total.

En ese sentido, el EMC nunca fue una estructura militar o política consolidada de manera autónoma, sino más bien el resultado de la narrativa política que el gobierno de Gustavo Petro promovió bajo

la política de Paz Total. Esta narrativa les otorgó un estatus político a varias estructuras disidentes de las FARC, las cuales anteriormente se consideraban fragmentadas y sin cohesión central. La iniciativa del gobierno, al tratar de establecer negociaciones con estos grupos, contribuyó a la consolidación de su identidad colectiva como el EMC, dándoles un peso y una legitimidad política que no tenían. Además, estas estructuras se autoproclaman como herederas de la lucha armada de las FARC desde la figura que, en su momento, fue Gentil Duarte y, actualmente, ostenta Iván Mordisco, consolidando una imagen que se alinea con la narrativa de ser la continuidad de las FARC, algo que les permitió articularse y negociar con el gobierno en un plano que les confiere mayor poder territorial, capacidad de control sobre las rentas ilícitas e incluso la configuración de múltiples procesos de gobernanzas armadas.

Otro de los liderazgos más relevantes al interior del EMC es Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’, comandante del Bloque Jorge Briceño Suarez y miembro de la Dirección Nacional. Su trayectoria guerrillera comenzó en 1998, en el Frente 40 de las FARC-EP, avanzando, posteriormente, dentro del Bloque Oriental. Andrey Avendaño, otra figura influyente, comanda el Frente 33 y, anteriormente, dirigió la delegación de paz del EMC hasta noviembre de 2023. La excarcelación de Avendaño tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y su posterior papel de liderazgo ponen de relieve la complicada dinámica entre los antiguos miembros de las FARC-EP y su continua participación en el conflicto armado.

Leopoldo Durán, también antiguo miembro de las antiguas FARC y del Bloque Jorge Briceño, es actualmente el jefe de la delegación de paz del EMC. El liderazgo de Durán refleja la compleja naturaleza de la estructura de mando interna del EMC, en la que los líderes de varios frentes y bloques tienen influencia sobre diferentes regiones, lo que contribuye a la fragmentación general de la organización.

Como se mencionó anteriormente, los diálogos iniciados por el gobierno del presidente Gustavo Petro han puesto aún más de manifiesto las divisiones existentes en el seno del EMC. Tras el aumento de las acciones militares del Bloque Occidental Jacobo Arenas, el gobierno suspendió el alto al fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca a partir del 20 de marzo de 2024 (Decreto 0385 de 2024). Esta medida visibilizó la creciente desconexión entre la dirección del EMC y sus distintos bloques regionales. Andrey Avendaño confirmó en una entrevista de abril de 2024 que la cohesión interna del EMC se está debilitando y que Iván Mordisco ya no participa activamente en los diálogos de paz (Semana, 2024). Como se ha venido mencionando, varios bloques, como el Bloque Amazonas, el Bloque Central Isaías Pardo y el Comando Conjunto de Oriente, no participan en las negociaciones de paz, mientras que otros, como el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Magdalena Medio, siguen comprometidos.

2. Marco teórico

Conceptualización de la Gobernanza Armada

El desarrollo de dinámicas de competencia o cooperación de los actores armados ilegales y el Estado en los territorios de Colombia, refleja la compleja relación de poder y control territorial que se configura a la luz de rentas ilícitas, modelos de desarrollo, bonanzas económicas y repertorios de violencia. Este fenómeno ha relativizado la autoridad del Estado, estableciendo sistemas paralelos de gobernanza que gestionan la seguridad, la justicia y las actividades económicas en regiones donde la capacidad del Estado es limitada o inexistente, o donde el Estado decide ceder, de forma extraoficial, sus competencias a otros actores. Este fenómeno, abordado y analizado desde múltiples marcos de explicativos, podría ser aglutinado en el concepto de gobernanza armada.

Uno de los primeros conceptos que se incorporan a la conceptualización de gobernanza armada es el de *rebelocracia*, propuesto por Ana Arjona, el cual sostiene que los grupos rebeldes suelen ejercer la gobernanza de formas que van desde un amplio control sobre la vida civil hasta una supervisión más militarizada, en función de los intereses estratégicos del grupo. Como explica, “los rebeldes pueden organizar instituciones que regulen tanto la vida política como la económica, convirtiéndose en gobernantes de facto en los territorios que controlan” (Arjona, 2016, p. 74). Esta gobernanza no es una mera toma oportunista del poder, sino más bien un enfoque estructurado que puede incluir la prestación de servicios públicos, la aplicación de normas e incluso la cooptación de mecanismos de resolución de conflictos.

Por otra parte, la teoría de *los duopolios de la violencia*, de Benjamin Lessing, aporta más datos sobre la coexistencia de estos actores con el Estado. Lessing sostiene que, en las regiones en las que tanto el Estado como los grupos armados ejercen influencia, a menudo mantienen un delicado equilibrio de poder, sin que ninguno de los dos actores pueda eliminar totalmente al otro. Esto crea un duopolio en el que la sociedad civil se ve obligada a subsistir entre sistemas de gobierno que compiten entre sí. Como explica Lessing, “existen duopolios de violencia cuando dos actores rivales coexisten en zonas de influencia compartidas, donde el Estado compite con los grupos armados por el control territorial” (Lessing, 2015, p. 92). Esta dinámica es particularmente relevante para el Estado Mayor Central, que opera en regiones donde la presencia estatal es limitada, estableciendo modelos de gobernanza que mezclan la coerción con formas de prestación de servicios públicos.

En ese sentido, las dos teorías anteriores sugieren la adaptabilidad de la gobernanza armada con formas institucionales de la construcción del poder. El EMC, como manifestación contemporánea de esta dinámica, opera en regiones donde el alcance del Estado es mínimo,

llenando eficazmente el vacío dejado por este. En estas zonas, el grupo hace cumplir las normas, recauda impuestos informales y regula las economías ilícitas, especialmente las relacionadas con el narcotráfico y la extracción de recursos. Esta gobernanza no es puramente coercitiva, sino que busca establecer la legitimidad entre las poblaciones locales, haciéndose eco de la idea de Zachariah Mampilly de una gobernanza rebelde eficaz, en la que los grupos armados construyen estructuras de gobernanza estables para asegurar su supervivencia y el consentimiento local. Como señala Mampilly, “la gobernanza rebelde efectiva está diseñada para establecer autoridad, mantener la estabilidad y ganarse el apoyo popular imitando funciones estatales como la tributación y la aplicación de la ley” (Mampilly, 2011).

En un nivel más focalizado, la gobernanza armada suele adoptar un carácter hiperlocalizado, en el que los grupos adaptan sus mecanismos de control a contextos territoriales y sociopolíticos específicos, donde la construcción del Estado ha sido históricamente diversa. Según la investigación de Eduardo Arias, sobre los regímenes armados de micronivel, la gobernanza en estas zonas suele estar fragmentada, y surgen diferentes normas y estructuras de poder en función de la relación del grupo con la comunidad. Arias sostiene que la gobernanza a nivel micro refleja una variedad de enfoques, en los que los actores armados adaptan sus estructuras de gobernanza a la economía política local y al tejido social (Arias, 2017).

Asimismo, el concepto de gobernanza criminal de Andreas Feldmann y Jorge Mantilla destaca la interacción entre las dinámicas de poder y las motivaciones económicas que estructuran estos órdenes de gobierno alternativos. Feldmann y Mantilla señalan que, en contextos de gobernanza criminal, el objetivo no es simplemente mantener el orden, sino regular y explotar economías ilícitas. En el caso del Estado Mayor Central, aunque pueda ofrecer una percepción de orden y seguridad, su principal interés radica en consolidar el control sobre las economías ilegales y extraer beneficios de ellas. Como explican

los autores, la gobernanza criminal implica la regulación del orden social y económico mediante la creación de instituciones formales e informales que compiten o complementan al Estado, particularmente en lo relacionado con economías ilícitas (Mantilla y Feldmann, 2021).

En definitiva, abundan múltiples marcos de análisis que conceptualizan la gobernanza armada, los cuales coinciden en la coerción con la provisión de servicios públicos y la gestión de economías ilícitas, configurando una forma de gobernanza que prospera en entornos donde las instituciones estatales son débiles o inexistentes. Además, esta forma de gobernanza no es estática ni homogénea, sino que se adapta constantemente para responder a las exigencias del control territorial, las bonanzas o las crisis económicas de las empresas criminales, la extracción de recursos frente a las demandas de los modelos de desarrollo y la búsqueda de legitimidad local. Así, las aportaciones teóricas de autores como Arjona, Lessing, Mampilly, Arias, Feldmann y Mantilla permiten analizar cómo los actores ilegales, como el EMC, modifican su estructura y relaciones de poder para consolidar su dominio en contextos donde la presencia institucional del Estado es frágil o disputada.

En este contexto, varios modelos de gobernanza armada –colaborativa, escalonada o por niveles, compartida y de desorden criminal– surgen como marcos críticos para entender cómo los actores no estatales establecen y mantienen el control sobre territorios y poblaciones. Estos modelos permiten comprender la flexibilidad estratégica y la capacidad de adaptación de grupos como el EMC, que emplean una serie de tácticas de gobernanza para equilibrar la coerción, la prestación de servicios y la extracción de recursos.

Gobernanza armada colaborativa

El modelo de gobernanza colaborativa pone de relieve la cooperación entre el Estado y los actores delictivos, donde el beneficio mu-

tuo impulsa una coexistencia pragmática. Las organizaciones delictivas operan con relativa autonomía, mientras que los actores estatales toleran o incluso facilitan sus actividades a cambio de un cierto nivel de orden o ciertas concesiones. Como sugieren Feldmann y Luna (2022), la gobernanza criminal puede funcionar a través de acuerdos informales entre las instituciones estatales y los actores no estatales, lo que permite que prosperen las economías ilícitas al tiempo que se mantiene cierto grado de estabilidad territorial. Este modelo es particularmente relevante para actores armados ilegales como el Estado Mayor Central, donde los pactos informales con las autoridades locales pueden permitir al grupo regular economías ilícitas como el narcotráfico, mientras que la interferencia directa del Estado sigue siendo limitada. Esta cooperación demuestra cómo la gobernanza criminal no es puramente antagónica, sino que a menudo coexiste con estructuras estatales en regiones frágiles.

Gobernanza armada por niveles

El modelo de gobernanza por niveles hace referencia a una organización jerárquica dentro de los grupos armados, en la que diferentes niveles de autoridad gestionan distintos aspectos de la gobernanza en los territorios. Este modelo permite a grupos como el Estado Mayor Central administrar eficientemente grandes regiones delegando responsabilidades en los líderes locales y manteniendo al mismo tiempo la coordinación central. Arjona (2016) analiza cómo los grupos rebeldes implementan estructuras de gobernanza descentralizadas, facultando a los comandantes locales para abordar las necesidades específicas de sus territorios. Este enfoque permite a los grupos mantener un control cohesionado al tiempo que se adaptan a las diversas condiciones locales. Para el Estado Mayor Central, esta estructura escalonada facilita una gobernanza territorial eficaz, garantizando que los líderes locales gestionen la seguridad, la extracción de recursos y el orden social, en consonancia con los objetivos estratégicos más amplios del grupo.

Gobernanza armada compartida

El modelo de gobernanza compartida implica la coexistencia de múltiples actores, incluidas fuerzas estatales y no estatales, cada uno de los cuales ejerce influencia sobre un territorio en una forma de cogobernanza. El concepto de duopolios de la violencia de Lessing (2015) explica cómo surgen áreas de control compartido, cuando ni el Estado ni las organizaciones criminales pueden dominar completamente, obligando a los civiles a navegar entre sistemas de gobernanza en competencia. En las regiones donde opera el Estado Mayor Central, esta dinámica es evidente, ya que el grupo impone sus propias normas e impuestos junto con instituciones estatales débiles. Esta gobernanza compartida crea un orden híbrido, en el que tanto el Estado como los actores criminales contribuyen a un frágil equilibrio de poder, influyendo en la vida cotidiana de las poblaciones locales. Este modelo refleja cómo las organizaciones delictivas pueden ejercer el control sin tratar necesariamente de sustituir a las instituciones estatales, sino coexistiendo con ellas en zonas disputadas.

Desorden criminal

Por último, el modelo de desorden criminal refleja un colapso de la gobernanza, en el que múltiples grupos criminales compiten por el dominio territorial, dando lugar a una forma de control fragmentada e inestable. Arias (2017) señala que, en estas situaciones, la violencia se convierte en la principal herramienta para afirmar el dominio, y las estructuras de gobernanza suelen ser incoherentes e inestables. Este modelo es especialmente relevante en regiones donde el Estado Mayor Central se enfrenta a la competencia de otros grupos armados o donde las divisiones internas de la organización socavan su capacidad para mantener un control cohesionado. En estos casos, los desórdenes criminales provocan un aumento de la inseguridad, ya que los grupos rivales luchan por el poder, lo que da lugar a un entorno volátil en el que los civiles se ven atrapados en el fuego cruzado y la gobernanza permanece fragmentada.

Acciones y características de la gobernanza del EMC

Las acciones de gobernanza armada del EMC demuestran la complejidad y variabilidad de las prácticas de gobernanza en las distintas regiones de Colombia. Organizado bajo su propia dirección, el EMC comprende 27 unidades separadas que operan en regiones clave, como Antioquia, Catatumbo, los Llanos Orientales, la Amazonía y el suroeste de Colombia. Las unidades fundadoras del EMC, en particular el Frente Primero y el Frente Jorge Suárez Briceño, mantienen el control sobre vastos territorios en Caquetá, el sur de Meta y Guaviare, y siguen participando en el conflicto armado sin desarmarse tras los acuerdos de paz de 2016 (Johnson, 2023).

En la región del Cauca, tres frentes y una columna móvil, alineados con el Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA), gestionan amplias estructuras de gobierno. En particular, el Frente Carlos Patiño (FCP) tiene una presencia significativa en las zonas rurales de varios municipios, como Argelia, El Tambo, Balboa, Patía y Rosas. Aunque estas unidades forman parte de la estructura más amplia del EMC, existen notables variaciones en los modelos de gobernanza que implementan. Johnson (2023) señala que, aunque el EMC aplica temas de gobernanza comunes, como la prevención de la interacción de civiles con enemigos, el control de la delincuencia local, la resolución de disputas y la regulación de las economías locales, los métodos de aplicación de estas normas difieren significativamente.

El Frente Primero ha establecido sistemas de gobernanza más formalizados, delegando el poder en autoridades civiles para gestionar aspectos del gobierno local. Por el contrario, el Frente Carlos Patiño controla directamente la mayoría de las acciones de gobierno y emplea una violencia más letal como herramienta de imposición. Estas variaciones, como señala Johnson (2023), pueden estar

influidas por los diferentes contextos de las disputas armadas. El Frente Carlos Patiño, por ejemplo, se enfrenta de forma directa con otros grupos armados ilegales y con el ejército, mientras que el Frente Primero opera en un entorno relativamente estable, lo que refuerza el argumento de Kalyvas (2015) de que las prácticas de gobernanza están determinadas por la intensidad de la competencia armada.

Las instituciones comunitarias preexistentes y las redes locales también desempeñan un papel fundamental en la configuración de la gobernabilidad, especialmente en regiones como el Guaviare, donde el Frente Primero se apoya en estas redes para facilitar la gobernabilidad. En contraste, el Frente Carlos Patiño opera en áreas con marcos institucionales más débiles, lo que lleva a una forma de gobernanza más coercitiva y violenta. Johnson (2023) sugiere que el Frente Primero presenta rasgos de gobernabilidad rebelde con fundamentos ideológicos, mientras que el Frente Carlos Patiño y gran parte del BOJA muestran características de gobernabilidad criminal, centrada principalmente en la explotación de economías ilegales.

Las variaciones en la gobernanza entre estos frentes reflejan diferencias ideológicas y operativas más profundas. Mientras que el Frente Primero conserva elementos de ideología política vinculados a sus orígenes en las FARC-EP, el Frente Carlos Patiño opera con un mayor énfasis en mantener el control sobre las lucrativas economías ilícitas, como el narcotráfico. Esto concuerda con los argumentos postulados por Weinstein (2006), que aluden que el acceso a los recursos influye en gran medida en las estrategias de gobierno de los grupos armados. El Frente Carlos Patiño, que maneja importantes recursos económicos, gobierna a través de la fuerza, lo que contrasta con el enfoque de gobernanza más comedido del Frente Primero, que maneja menos recursos, pero opera en entornos más estables (Johnson, 2023).

Estudios de caso: presencia diferenciada del EMC

Como se mencionó anteriormente, el EMC demuestra un enfoque de gobernanza diverso en regiones como Guaviare, Cauca, Putumayo, Caquetá y Antioquia, donde ha consolidado su influencia mediante la colaboración estratégica o coaccionada con las instituciones locales y la confrontación violenta con grupos armados rivales. En Guaviare, la gobernanza del EMC se caracteriza por un tipo de estas dos colaboraciones, la cual es normalizada por medio de las Juntas de Acción Comunal locales, especialmente en las zonas controladas por el Frente Primero. Estas colaboraciones facilitan la aplicación de las normas del EMC sobre deforestación y cultivo de coca, y el grupo adapta sus políticas medioambientales a las necesidades económicas de los cultivadores de coca locales. El Frente Primero ha pasado de restringir, inicialmente, la deforestación a permitirla, posteriormente, lo que demuestra su estrategia de gobernanza flexible destinada a consolidar el control sobre la economía local y fomentar la dependencia de sus dirigentes (Johnson, 2023).

Sin embargo, en el Cauca, el Frente Carlos Patiño (FCP) – parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOJA)– opera en un contexto de intenso conflicto, protagonizando violentos enfrentamientos con el ELN y la Segunda Marquetalia. La gobernanza del FCP se caracteriza por el uso de la violencia, que incluye asesinatos, desapariciones forzadas y el control de la producción de coca. Este frente ha establecido una presencia dominante en varios municipios, como Argelia y El Tambo, por medios violentos, en particular atacando a grupos rivales e imponiendo normas estrictas a los compradores y traficantes de coca (Johnson, 2023).

Esta divergencia en los modelos de gobernanza pone de relieve la adaptabilidad del EMC. En Guaviare, el EMC trabaja con organizaciones comunitarias locales para mantener una forma de

gobernanza compartida, mientras que en Cauca, el FCP ejerce un control directo y coercitivo sobre las poblaciones locales. El Bloque Occidental Jacobo Arenas enfrenta continuas disputas, particularmente en municipios como Buenos Aires, Corinto y Suárez, donde se han intensificado los enfrentamientos violentos entre el FCP y otros grupos, como la Segunda Marquetalia y el ELN (El País, 2024). En el Valle del Cauca, la Columna Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez también se enfrentan al ELN, y en Nariño, el Frente Franco Benavides mantiene disputas con el Frente Comuneros del Sur del ELN (Conflict Responses, 2024).

Mientras tanto, en Putumayo y Caquetá, el Bloque Jorge Briconeño –a través del Frente Carolina Ramírez y el Frente Rodrigo Cadete– ha fortalecido su control territorial, enfrentándose con los Comandos de Frontera y la Columna Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. La violencia en estas regiones se ha intensificado, en particular contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, ya que estos frentes siguen explotando recursos como la deforestación y el control de las rutas fluviales en el Amazonas (Defensoría del Pueblo, 2024). Los riesgos humanitarios se ven amplificados por las continuas disputas del EMC con otros grupos, especialmente los Comandos de Frontera, lo que complica aún más la dinámica del conflicto en la zona.

En Antioquia, el Bloque Magdalena Medio ha forjado alianzas estratégicas con el ELN para contrarrestar la influencia del Clan del Golfo. Los frentes 18 y 36, que operan en este departamento, han protagonizado numerosos enfrentamientos con grupos rivales, consolidando aún más el control del EMC. Estas alianzas han permitido al EMC afianzarse en territorios en los que la presencia estatal sigue siendo débil, al tiempo que participa en violentos enfrentamientos con las fuerzas estatales y los grupos rivales (Conflict Responses, 2024).

3. Metodología

La metodología empleada en este estudio adopta un enfoque cualitativo de estudio de caso para analizar al EMC como múltiples estructuras que se aglutinan discursivamente en grupo armado disidente en el marco más amplio de la gobernanza armada en Colombia. La investigación se basa en una combinación de fuentes primarias y secundarias, incluyendo comunicados públicos emitidos por el EMC, informes gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales (ONG), así como la literatura académica existente sobre grupos armados en el período posterior al acuerdo de paz de la Habana en Colombia.

Este estudio examina críticamente el modelo de gobernanza del EMC, contrastándolo con los marcos teóricos sobre gobernanza criminal y rebelde, y evalúa cómo el grupo ejerce el control territorial, gestiona las economías ilícitas e interactúa tanto con otros actores armados como con la población local. El análisis también se basa en la relativización de los postulados de Kyle Johnson (2023), cuyo trabajo hace hincapié en las dimensiones ideológicas de la gobernanza armada ilegal. El estudio problematiza el marco de Johnson explorando el paso del EMC de una insurgencia con motivaciones políticas a lo que ahora puede parecerse a una empresa criminal.

Para profundizar en la comprensión de la dinámica de gobernanza del EMC en regiones como Guaviare, Cauca, Caquetá, Putumayo y Antioquia, se desarrolló un modelo de correlación cualitativa. Este modelo analiza las interrelaciones entre variables clave de gobernanza, centrándose en la seguridad, la justicia, las normas y la regulación económica.

Dada la naturaleza cualitativa de los datos, se adoptó un enfoque analítico para identificar patrones de correlación basados en las descripciones y ejemplos empíricos proporcionados. El estudio asignó valores

cualitativos para representar la fuerza y la dirección de las correlaciones entre las variables de gobernanza, utilizando las siguientes categorías:

- Correlación positiva alta (+)
- Correlación positiva media (+/-)
- Correlación baja o nula (0)
- Correlación negativa (-)

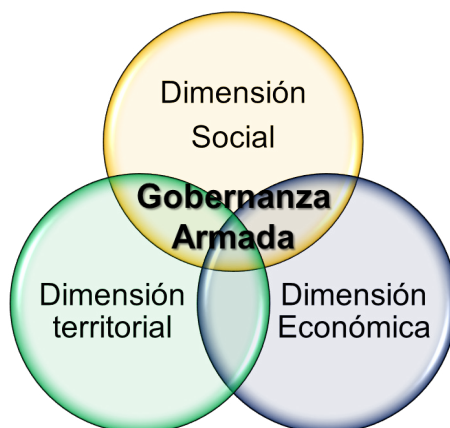
Este método permitió explorar cómo el EMC implementa su modelo de gobernanza en diferentes contextos regionales, identificando patrones de gobernanza que reflejan la adaptabilidad del grupo a la hora de mantener el control territorial y económico. El análisis de estas correlaciones permite comprender cómo el EMC adapta sus estrategias de gobernanza en respuesta a las condiciones locales y cómo estas dinámicas configuran las interacciones con otros actores armados y afectan a las poblaciones.

Asimismo, este estudio examina cualitativamente cómo funciona la gobernanza en los territorios, por medio de un acercamiento a fuentes periodísticas locales y nacionales, quiénes pueden llegar a evidenciar la forma en que la población es afectada por los grupos armados. Para esto se tomaron distintas fuentes periodísticas que ilustran la gobernanza armada ejercida por el EMC.

Sin embargo, es necesario poder clasificar estas fuentes en torno a las afectaciones producto de la gobernanza armada ejercida por el EMC, para esto se plantearon tres dimensiones, las cuales ejemplifican la gobernanza armada frente a la población donde esta organización ejerce su territorialidad², las cuales se muestran a continuación.

2 La territorialidad se plantea según la perspectiva de Daniel Pecault, donde un grupo armado ejerce el monopolio de la fuerza imponiendo normas a los habitantes, consiguiendo cierto apoyo sin acudir a la coacción directa o sin estar en el territorio. En: Universidad Nacional de Colombia (2004). *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*. Universidad Nacional de Colombia y Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET).

Dimensiones de análisis para la gobernanza armada



Dimensión social

Esta dimensión comprende los mecanismos de reglas en el entorno social que vendrían a constituir una de las partes más importantes de retroalimentación del sistema social para conservar su estabilidad. En este sentido, los actores armados y, sobre todo, sus agentes se convierten en defensores de cierta moral dentro de las comunidades que controlan, utilizando por ello “estrategias y sanciones (...) que pretenden garantizar el sometimiento del individuo a las normas sociales o leyes imperantes” establecidas por ellos de manera tácita o explícita en los territorios, las que además serían usadas como como un instrumento de dominación (López Puerta, 2015).

Dimensión Territorial

Esta dimensión puede entenderse desde la perspectiva planteada a partir de la gobernanza criminal como el poder de implementar y sostener un sistema de regulación (Bonilla Calle, 2022), estableciendo una soberanía en el territorio de los actores que habitan en la zona controlada.

Dimensión económica

En el escenario moderno, el Estado (sea cual sea el nivel de gobierno) representa su institucionalidad apoyado en medidas constitucionales, como: monopolio legítimo del uso de la violencia, la representación de la soberanía territorial o recaudación de impuestos; asimismo, cuando las Organizaciones Criminales tienen el monopolio de la violencia en el territorio, un control del territorio y resolución de disputas (entre los habitantes), imponen condiciones en las que generan impuestos a los residentes, haciendo una función cercana a “mini estados” (Lessing, Benjamin, 2021).

Estas tres dimensiones pueden apoyar las correlaciones planteadas en torno a las normas, regulación económica, justicia y seguridad. Asimismo, permiten evidenciar con hechos documentados en fuentes periodísticas locales y nacionales los patrones de correlación establecidos, lo que aporta al estudio una visión desde lo cuantitativo apoyado en lo cualitativo.

4. Resultados y discusión

Modelo de correlación

	Seguridad (S)	Justicia (J)	Normas (N)	Regulación Económica (RE)
Seguridad (S)	-	+	+	+/-
Justicia (J)	+	-	+	+
Normas (N)	+	+	-	+
Regulación Económica (RE)	+/-	+	+	-

La matriz de correlación revela interdependencias significativas entre las variables clave de gobernanza –seguridad, justicia, normas y regulación económica– que dan forma a la dinámica operativa del

EMC. Este análisis propone un abordaje de cómo el EMC adapta sus estrategias de gobernanza a través de diferentes contextos regionales, incluyendo Guaviare, Cauca, Putumayo, Caquetá y Antioquia, reflejando una compleja interacción entre el mantenimiento del control territorial y la maximización de la explotación económica.

Seguridad y justicia (+): alta correlación positiva

La matriz indica una alta correlación positiva entre seguridad y justicia. El establecimiento de la seguridad es una precondition para que el EMC imponga su sistema de justicia paralelo en los territorios bajo su control. Por ejemplo, en Guaviare, el Frente Primero no solo mantiene un estricto control territorial, sino que también administra un sistema localizado de justicia a través de su manual de convivencia. Este sistema de justicia paralelo garantiza el orden social mediante la aplicación de normas y la resolución de disputas, consolidando la autoridad del EMC en la región (Johnson, 2023). La capacidad de controlar la seguridad influye directamente en la capacidad del EMC para configurar el panorama judicial local, a menudo desplazando o cooptando a las instituciones estatales.

Seguridad y normas (+): alta correlación positiva

Se observa una correlación igualmente alta entre la seguridad y las normas, lo que indica que el control del EMC sobre la seguridad es fundamental para imponer normas sociales y de comportamiento a las poblaciones bajo su gobierno. Por ejemplo, en Cauca, el Frente Carlos Patiño (FCP) impone la identificación obligatoria y otras medidas para regular los movimientos y acciones de la población local, lo que refleja el fuerte vínculo entre el control territorial y la imposición de normas sociales. Esta imposición de normas no solo facilita la gobernabilidad, sino que también fortalece el control del EMC sobre las comunidades locales al dictar la vida cotidiana y los comportamientos (Johnson, 2023).

Seguridad y regulación económica (+/-): Correlación positiva media

La relación entre seguridad y regulación económica es algo más débil, indicando una correlación positiva media. Si bien el mantenimiento de la seguridad es esencial para regular las economías ilícitas, las prioridades de los EMC pueden a veces inclinarse hacia el beneficio económico a expensas de la seguridad local. En Caquetá y Putumayo, la participación del EMC en la explotación de recursos naturales –como la minería ilegal y la deforestación– agrava los riesgos de seguridad en estas áreas. La alta demanda de recursos como la coca y la madera conduce a un aumento de la violencia y la inestabilidad, particularmente cuando el EMC compite con grupos rivales como el ELN y la Segunda Marquetalia por el control de estas economías (Defensoría del Pueblo, 2024). Esta dinámica pone de relieve la tensión entre los objetivos económicos del EMC y su capacidad para mantener la seguridad.

Justicia y normas (+): alta correlación positiva

Existe una fuerte correlación entre la justicia y las normas, ya que ambas se refuerzan mutuamente como instrumentos de gobierno. En Guaviare, por ejemplo, el Frente Primero no solo impone un sistema de justicia localizado, sino que también formaliza normas de comportamiento a través del manual de convivencia, que dicta el comportamiento social aceptable. La aplicación de estas normas está estrechamente vinculada a los mecanismos de justicia del EMC, creando un sistema cohesivo de gobernanza que consolida su control sobre la región (Johnson, 2023). El sistema de justicia, en este contexto, sirve para resolver disputas y para reforzar la autoridad del EMC integrando sus normas en el tejido social.

Justicia y regulación económica (+): alta correlación positiva

La matriz también muestra una alta correlación positiva entre justicia y regulación económica, lo que sugiere que el sistema de jus-

ticia del EMC está estrechamente ligado a sus intereses económicos. El sistema de justicia paralelo del grupo se utiliza a menudo para castigar a aquellos que amenazan su control sobre las economías ilícitas, particularmente en regiones ricas en recursos como Caquetá y Putumayo. La violencia selectiva contra líderes ecologistas y defensores de los derechos humanos que se oponen a actividades ilegales, como la deforestación o el cultivo de coca, subraya esta relación. El EMC utiliza su sistema judicial como herramienta para salvaguardar sus actividades económicas, eliminando posibles amenazas y manteniendo su control sobre recursos económicos clave (Defensoría del Pueblo, 2024).

Normas y regulación económica (+): alta correlación positiva

La correlación entre normas y regulación económica también es alta, lo que indica que las normas impuestas por el EMC desempeñan un papel directo en la regulación de las actividades económicas. En Cauca, por ejemplo, el FCP impone reglas estrictas a los compradores de coca, dictando cómo y bajo qué condiciones pueden realizar transacciones. Esta regulación tiene un impacto directo en la economía local, ya que determina los términos del comercio y controla el acceso a los mercados ilícitos. Al regular estas actividades, el EMC fortalece su base económica, al tiempo que refuerza su control social sobre las poblaciones locales (Johnson, 2023).

Análisis de correlaciones

Interdependencia entre las variables

El análisis de la matriz de correlaciones revela un alto grado de interdependencia entre las variables de gobernanza. La seguridad sirve de base sobre la que el EMC construye su control sobre la justicia, las normas y la economía. Cada una de estas dimensiones alimenta y refuerza a las demás, creando un sistema de gobernanza cohesivo y adaptable a las condiciones locales. Por

ejemplo, en regiones como el Guaviare, la capacidad del EMC para mantener la seguridad influye directamente en su capacidad para imponer normas y regular actividades económicas como el cultivo de coca.

La seguridad como base de la gobernanza

La seguridad aparece como la piedra angular de la estrategia de gobernanza del EMC. Sin mantener el control territorial, el EMC no podría imponer su sistema de justicia, hacer cumplir las normas sociales ni regular la economía local. En regiones como el Cauca, donde el EMC está inmerso en un conflicto armado permanente, la capacidad del grupo para gobernar depende de su habilidad para ejercer control sobre la seguridad por medios violentos.

La justicia como herramienta económica

El sistema de justicia paralelo del EMC no es simplemente un mecanismo para mantener el orden social, sino que también sirve como herramienta para regular y proteger sus intereses económicos. La imposición de la justicia está a menudo vinculada al control del grupo sobre las economías ilícitas, como se ve en regiones como Caquetá y Putumayo, donde los defensores del medio ambiente que desafían las actividades económicas del EMC son a menudo objeto de violencia.

Las normas como medio de control social

La imposición de normas es fundamental para el modelo de gobernanza del EMC, ya que sirve como herramienta para controlar a la población local y legitimar su presencia a los ojos de determinados sectores de la comunidad. La capacidad del EMC para regular el comportamiento mediante la aplicación de normas refuerza su autoridad y facilita el control del grupo sobre las actividades económicas y sociales.

La regulación económica como objetivo principal

En última instancia, el sistema de gobierno del EMC está orientado hacia el control y la explotación de las economías ilícitas. La capacidad del grupo para mantener la seguridad, imponer la justicia y regular las normas sociales sirve a este objetivo más amplio, asegurando su dominio sobre los recursos económicos clave en regiones como Cauca, Putumayo y Antioquia.

Correlaciones y dimensiones de gobernanza del EMC por contextos regionales

Guaviare: Hegemonía de control y colaboración local

En el Guaviare, el Frente Primero del EMC ha mantenido un control hegemónico sobre la región, regulando el acceso territorial y colaborando estrechamente con las Juntas de Acción Comunal (JAC) locales para hacer cumplir su gobernanza. Este control, a menudo descrito como rebelocracia (Arjona, 2016), permite al EMC implementar un sistemas de justicia local y gestionar actividades económicas, como el cultivo de coca, sin la disputa de otros grupos armados. El aparato de seguridad del Frente Primero no se limita a mantener el orden, sino a asegurar su posición como autoridad dominante en la región. Este alto nivel de control facilita la administración de justicia, ya que el EMC impone sanciones progresivas para mantener el orden social (Johnson, 2023). Al colaborar con instituciones locales como el CCC, el EMC formaliza su gobierno a través de un “manual de convivencia”, delegando la aplicación de la ley en los líderes locales, lo que refuerza las normas sociales en la región. Sin embargo, la flexibilidad de la EMC a la hora de ajustar las políticas medioambientales, como permitir la deforestación para el cultivo de coca, demuestra su capacidad para adaptar las estructuras de gobierno a las necesidades cambiantes de su economía ilícita (Johnson, 2023). Esta adaptabilidad es clave para entender la resiliencia del EMC en el Guaviare, donde la gobernanza local está entrelazada con sus estrategias económicas y de seguridad.

Asimismo, la dimensión económica puede verse en las citaciones y comunicados que hacen a los comerciantes de la región: “El comunicado cita a todos los comerciantes a reunirse en un caserío de Puerto Nuevo para generar acuerdos de aporte en las finanzas de esta organización armada en el territorio” (El Espectador, 2024). Con respecto a la dimensión social, el artículo muestra que el manual de convivencia

enfatisa en que está prohibido el expendio de licores y cigarrillos para menores de 16 años, así como también la operación de establecimientos comerciales más tarde de las 10:00 p. m., entre semana, y de las 2:00 a. m., los fines de semana. (Rodríguez, 2024)

Por último, en la dimensión territorial se puede ver que, en Guaviare, el EMC ha estado creando guardias campesinas para poder respetar la soberanía del territorio y que se cumplan las normas, tal como menciona la noticia “obligaron a reunirse a la comunidad,(...), además de indicarles que tenían que crear ‘Guardias Campesinas’”.

Cauca: Gobernabilidad violenta y regulación económica

La presencia del EMC en el Cauca, particularmente a través del Frente Carlos Patiño (FCP), está marcada por la violencia extrema y el estricto control social. El FCP opera en el marco de lo que Lessing (2015) describe como “duopolios de la violencia”, donde actores armados compiten por el dominio del territorio y los recursos. En esta región, el EMC ha impuesto estrictas medidas de seguridad, como tarjetas de identificación obligatorias para los residentes, lo que les permite controlar los movimientos e imponer el cumplimiento de sus normas. Este alto nivel de control de la seguridad facilita la administración de justicia por parte del FCP, aunque a través de medios violentos, como secuestros y asesinatos para reprimir a la oposición y mantener la autoridad (Johnson, 2023). La imposición de medidas tan draconianas en la gobernanza social refleja la necesidad de las

FCP de legitimizar su autoridad en medio de los continuos conflictos con el ELN y la Segunda Marquetalia (Johnson, 2023). Sin embargo, este enfoque violento de la gobernanza también ha generado una importante inestabilidad económica, especialmente en regiones como Argelia y El Tambo, donde la regulación de la economía de la coca por parte del FCP ha creado resistencia entre las comunidades locales. El control del EMC sobre la regulación económica, aunque tiene como objetivo consolidar sus intereses financieros, ha provocado crisis económicas en zonas donde las políticas restrictivas sobre la venta de coca han trastornado los medios de subsistencia de los campesinos locales (Johnson, 2023). Esta situación subraya la compleja relación entre violencia, gobernabilidad y control económico en el Cauca.

En adición, a la dimensión social y territorial en Cauca y según el artículo publicado en *Infobae*, llama la atención que existen normas dentro del territorio que consisten, por ejemplo, en “que a velocidad máxima es menor a los 40 kilómetros por hora, no se puede transitar después de las 8:00 pm, motociclistas no pueden usar cascos, horarios de tránsito peatonal y vehicular”. Asimismo, en cuanto a la dimensión económica, “En caso de no cumplirse dichas normas, la multa es de 5 millones [sic] de pesos o ser secuestrado y forzado a trabajos continuos y a la intemperie, en la construcción de vías y carreteras que conectan con las zonas montañosas de la selva caucana” (Reyes, 2024).

Antioquia: Gobernabilidad colaborativa y economías ilícitas

En Antioquia, la gobernabilidad del EMC se caracteriza por alianzas estratégicas con el ELN para consolidar el control sobre territorios clave y economías ilícitas, particularmente en el contexto del narcotráfico. Estas alianzas representan lo que Lessing (2015) llama “duopolios de la violencia”, donde los grupos armados colaboran para maximizar su influencia y resistir a actores rivales como el Clan del Golfo. Al formar tales alianzas, el EMC asegura una ma-

por estabilidad en su control de importantes rutas de narcotráfico, particularmente en regiones donde el ELN y el EMC han formado pactos de no agresión (Johnson, 2023). Esta gobernanza compartida permite a ambos grupos imponer normas conjuntas a las comunidades locales, regulando tanto el comportamiento social como las actividades económicas, especialmente en relación con el narcotráfico. Los sistemas de justicia del EMC y del ELN trabajan conjuntamente para hacer cumplir estas normas, sancionando a aquellos que amenazan sus intereses económicos compartidos (Feldmann y Mantilla, 2021). Sin embargo, esta gobernanza colaborativa no está exenta de desafíos, ya que los enfrentamientos con el Clan del Golfo y otros grupos rivales crean períodos de inestabilidad que pueden interrumpir su control sobre las economías ilícitas. No obstante, la capacidad del EMC para aprovechar las alianzas con otros actores armados refleja su adaptabilidad estratégica y refuerza su capacidad para regular tanto la seguridad como las actividades económicas en la región. Este modelo de gobernanza compartida pone de relieve el enfoque pragmático del EMC para consolidar el poder en entornos complejos y conflictivos como Antioquia.

Además, en Antioquia se presentan similitudes en las dimensiones. Según informa la prensa, existe también un manual de convivencia, el cual podría ser implementado en 14 municipios, de los cuales seis se ubican al norte, seis al Bajo Cauca y dos más al nordeste del departamento. Entre las normas analizadas desde la dimensión territorial está la prohibición para transitar en el territorio después de las 2:00 a. m. a pie o vehículo y, de no cumplirse, se tendría que pagar una multa de \$3 000 000, asimismo, en cuanto a la dimensión social y económica, existen normas y multas a personas que invadan lotes, corran linderos o cometan hurtos y otros delitos (Telemédellín, 2023), o, como lo menciona el artículo, quienes se involucren en chismes tendrán que pagar una multa de \$1 500 000; los caballos no pueden ingresar a los bares y los padres de familia que permitan que los menores de edad ingresen a un negocio donde

vendan licor también tendrán que pagar una multa de \$1 000 000 (Munevar, 2023).

5. Conclusiones

Una de las principales conclusiones es la capacidad del EMC para adaptar sus planteamientos de gobernanza a la dinámica regional y a las condiciones territoriales del conflicto. En regiones como Guaviare, el EMC emplea un modelo de gobernanza colaborativa, trabajando con instituciones comunitarias locales para mantener el control social y económico. Esto se alinea con el concepto de rebelocracia propuesto por Arjona (2016), donde el EMC ha formalizado mecanismos de gobernanza en cooperación con actores locales. Por el contrario, en regiones como El Cauca, la gobernanza del EMC se caracteriza por la violencia extrema y el control sobre las economías ilícitas, lo que demuestra un enfoque más coercitivo, consistente con los duopolios de la violencia de Lessing (2015).

Asimismo, la capacidad del EMC para pasar de ser un grupo insurgente ideológicamente dirigido a otro que opera como una empresa criminal es otro dato significativo. Esta transición es particularmente evidente en su regulación de economías ilícitas y alianzas estratégicas con otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en regiones como Antioquia y el suroeste de Colombia (Johnson, 2023). Estas alianzas no solo refuerzan el control territorial del EMC, sino que también facilitan el acceso del grupo a rutas de narcotráfico y recursos críticos, lo que refleja su enfoque pragmático de la gobernanza.

La investigación revela además que las estrategias de gobernanza del EMC no son monolíticas, sino que se adaptan a las condiciones locales y a la intensidad de la competencia armada. En la región Amazónica, por ejemplo, el control del EMC se caracteriza por la explotación violenta de los recursos naturales y la represión contra

los líderes sociales y las comunidades indígenas (Fundación Paz & Reconciliación, 2024). Aquí, el EMC combina la coerción con la prestación de servicios, una estrategia dual que asegura su legitimidad local y sostiene su poder territorial.

Por último, el estudio subraya la importancia de entender la gobernanza armada en Colombia como un proceso mutable, en el que los grupos armados operan en constante interacción con el Estado y otros actores del conflicto. La fragmentación interna del EMC, impulsada por las divisiones de los frentes y bloques regionales, plantea interrogantes sobre la capacidad del grupo para participar de manera cohesionada en las negociaciones de la Paz Total iniciadas por el gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro. A pesar de estos elementos, el EMC sigue siendo un actor fundamental en la conformación del orden social y económico en amplias zonas de Colombia, lo que lo posiciona como una figura central en cualquier esfuerzo hacia la finalización del conflicto armado en Colombia.

6. Referencias

- Arjona, A. (2016). *Rebelocracy: Social order in the Colombian civil war*. Cambridge University Press.
- Arias, E. (2017). *Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean*. Cambridge University Press.
- Bonilla Calle, D. (2022). Gobernanza criminal de la minería del oro en la región del Bajo Cauca y en el municipio de Buriticá, Antioquia. *Estudios Políticos*, (65), 241-270. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n65a09>
- Conflict Responses. (2024). The expanding influence of EMC: Control, violence, and territorial governance in Colombia. *Conflict Responses*.
- Defensoría del Pueblo. (2024). Alerta Temprana 007-2024. *Defensoría del Pueblo*.
- El Espectador. (25 de julio de 2024). Disidentes de las FARC citan a comerciantes de Guaviare a reunión obligatoria. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/judicial/disidentes-de-las-farc-citan-a-comerciantes-de-guaviare-a-reunion-obligatoria/>

- El País. (2024). Los enfrentamientos entre el EMC y el ELN agravan la crisis humanitaria en Cauca. *El País*.
- Estado Mayor Central (2016). *Declaraciones del Estado Mayor Central de las FARC-EP*. Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA). https://cedema.org/digital_items/7241
- Fajardo Montaña, D. (2014). Estado, paraestado y conflicto armado en Colombia. En *El poder en Colombia: Procesos, discursos y dinámicas* (pp. 67-89). Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Feldmann, A. y Mantilla, J. (2021). Gobernanza criminal y la regulación de economías ilícitas en América Latina. *Journal of Latin American Studies*, 53(1), 23-45.
- Fundación Paz & Reconciliación. (2024). ¿Plomo es lo que viene? Dos años de balance y retos de la Paz Total. En *Presencia y accionar de grupos armados en Colombia 2024* (Capítulo II). Fundación Paz & Reconciliación.
- Gutiérrez Sanín, F. (2004). Criminal Rebels? A discussion of war and criminality from the Colombian experience. *Politics & Society*, 32(2), 257-285. <https://doi.org/10.1177/0032329204263070>
- Insight Crime. (2024). Estado Mayor Central de las FARC: Origen, evolución y presencia territorial. *Insight Crime*. <https://www.insightcrime.org>
- Johnson, K. (2023). La gobernanza armada ilegal y su transferencia al Estado para construir la paz (Documento de Trabajo 2-2023). *Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CA-PAZ*.
- Kalyvas, S. N. (2015). *The logic of violence in civil war*. Cambridge University Press.
- Lessing, B. (2015). *Making peace with crime: Criminal groups and political order in Latin America*. Cambridge University Press.
- López Puerta, R. (2015). La moral en las comunidades controladas por actores armados: Estrategias de dominación. *Revista Latinoamericana de Sociología*, 47(2), 145-167.
- Mampilly, Z. (2011). *Rebel rulers: Insurgent governance and civilian life during war*. Cornell University Press.
- Munevar, T. (24 de agosto de 2023). Multas por invadir lotes, caminar tarde o armar peleas: este es el “manual de convivencia” que las disidencias de las Farc quieren imponer en algunos municipios de Antioquia. *Infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/08/24/multas-por-invadir-lotes-caminar-tarde-o-armar-peleas-este>

es-el-manual-de-convivencia-que-las-disidencias-de-las-farc-quieren-imponer-en-algunos-municipios-de-antioquia/

Reyes, D. (20 de abril de 2024). Esta es la “República independiente” de las disidencias de las Farc en el Cauca. *Infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2024/04/20/esta-es-la-republica-independiente-de-las-disidencias-de-las-farc-en-el-cauca>

Rodríguez, J. D. (17 de noviembre de 2023). Disidencias Farc están obligando a la comunidad a crear guardias campesinas en Guaviare. *W Radio*. <https://www.wradio.com.co/2023/11/17/disidencias-farc-estan-obligando-a-comunidad-a-crear-guardias-campesinas-en-guaviare/>

Rodríguez J. C. (17 de junio de 2024). Desde el chisme hasta el exhibicionismo: estas serían las prohibiciones de las disidencias de las Farc en el país. *Infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2024/06/17/desde-el-chisme-hasta-el-exhibicionismo-estas-serian-las-prohibiciones-de-las-disidencias-de-las-farc-en-caqueta/>

Richani, N. (2002). *Systems of violence: The political economy of war and peace in Colombia*. State University of New York Press.

Semana. (2024). Entrevista a Andrey Avendaño: La paz total y el futuro del EMC. *Semana*.

Telemedellín. (24 de agosto de 2023). Disidencias de las Farc impusieron “normas de convivencia” en algunos municipios. *Telemedellín*. <https://telemedellin.tv/disidencias-de-las-farc-imponen-normas/663730/>

Weinstein, J. M. (2006). *Inside rebellion: The politics of insurgent violence*. Cambridge University Press.

